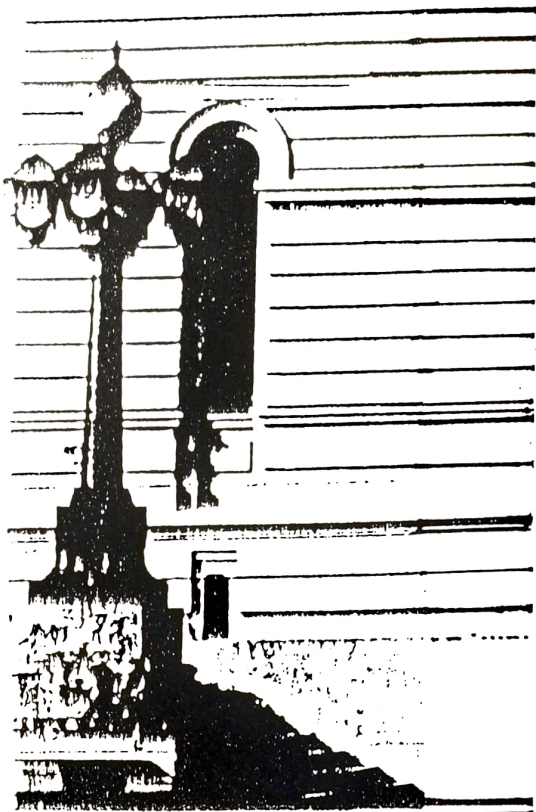


LA UNIVERSIDAD POLITICA

Jorge Ares Pons

"En resumen, el esquema amplio del sistema político de la organización académica tiene el siguiente aspecto: existe una compleja estructura social que genera múltiples presiones; existen muchas fuentes y formas de poder y de presión que inciden sobre los encargados de tomar decisiones; existe un escenario legislativo que traduce esas presiones en políticas, y existe una fase de ejecución de políticas que genera retroalimentación y potencialmente conflictos nuevos".

J.V. Baldridge et al.



Universidad y política. Antinomia irreducible para muchos, no por confundir lo "político" con lo partidario -como suele suceder- sino por oponer a una imagen turbulenta y exasperada de lo "político", una especie de arquetipo pleno de solemnidad, equilibrio, sensatez y, por sobre todas las cosas, identificable con el consenso y la sabiduría necesariamente exigibles a todos los actos y decisiones universitarios.

Lo "político", asociado con el conflicto, la contienda de intereses, la agitación permanente; lo "universitario", sinónimo de sabiduría, altruismo, objetividad, recogimiento reflexivo.

Tal vez, el lector reclame a estas alturas un poco más de precisión y nos pida aclarar qué entendemos exactamente por "político".

Vocablo polisémico si los hay, vale la pena introducir aquí una breve digresión, para señalar, de la forma más clara posible, el significado que pretendemos darle.

Si "política" es el "arte de gobernar", como un poco simplistamente suelen afirmar los diccionarios o, con algo más de sutileza, el arte de conducir los asuntos de una comunidad, obviamente serán "políticas" aquellas cuestiones que afectan el interés colectivo generando o frustrando expectativas en algún sector de esa comunidad.

Esta acepción es, sin duda, la que más se aproxima al sentido primigenio del vocablo "politikós", que hace directa referencia a los asuntos propios de la "polis": ciudad, en el amplio sentido que el término tenía para los griegos -más propio de lo que hoy entendemos por Estado- y en consonancia con la extensa y actual acepción del término "ciudadano".

La dinámica de una institución como la universitaria es de naturaleza esencialmente política. Son decisiones "políticas" las que definen su perfil, sus objetivos, el grado y la forma de su incidencia en el seno de la sociedad de la cual forma parte. Estas decisiones son siempre la resultante de una confrontación entre opiniones e intereses en permanente proceso de interacción y cambio.

Sin demasiado rigor semántico podríamos caracterizar a estas decisiones políticas como "actos de gobierno" propiamente dichos, en oposición a los "actos administrativos". Los actos de gobierno involucran la proposición de objetivos no implícitos en la simple mecánica burocrática y la opción entre alternativas que van definiendo sobre la marcha el cauce de la acción institucional. Los actos administrativos son consecuencia directa de la aplicación racional de normas preestablecidas.

En sus extremos, los actos de gobierno -actos políticos- serían esencialmente creadores, y los administrativos rutinarios.

Podría agregarse que la dimensión política de la universidad se proyecta en dos planos superpuestos, uno interno, relativo a la dinámica de los grupos de presión específicamente universitarios y otro externo, que tiene que ver con los intereses globales de la sociedad, estrechamente ligados a los de la comunidad universitaria propiamente dicha.

Una institución creativa y ante todo crítica en el terreno del conocimiento, no puede ser sino política, porque la naturaleza de la interacción social que en ella se genera es esencialmente política.

Nos cuesta creer que cierto modelo utópico de universidad consensual y ponderada, no sujeta a permanentes tensiones y conflictos, haya existido alguna vez. La universidad medieval, con frecuencia añorada como tal modelo, distó mucho de ser ese claustro armónico: la contienda por razones religiosas, filosóficas o partidarias fue un hecho habitual en su seno, a veces de una contundencia inusitada.

Tal vez en las universidades ministeriales, sometidas a regímenes autoritarios y verticalistas, falló ese clima de movilidad y conflicto; no por ello, sin embargo, perdieron su carácter de instituciones políticas, definido por la imposición de una sola opinión homogeneizante.

La comprensión de la naturaleza política de las universidades se hizo natural y obvia en América Latina a partir del movimiento reformista de Córdoba.

En la década del 70 (1970-1974) en la Universidad de Stanford se llevó a cabo un profundo estudio sobre el gobierno académico en la educación superior ("Stanford Project on Academic Governance"), bajo la dirección de J. Victor Baldridge (7).

En ese proyecto se consideraron tres modelos alternativos: el modelo burocrático, verticalista, donde las decisiones se adoptan en función de un criterio legalista-racional previamente establecido, sin mayores instancias de deliberación; un modelo "universitario" clásico, que funcionaría no a través de una estructura jerárquica diferenciada sino, más bien, mediante una dinámica de consenso, donde la autoridad es fruto de la capacidad y el conocimiento y no de la posición formal ocupada en un escalafón. Y un modelo "político" cuya característica fundamental es el choque entre intereses y opiniones encontrados; en este modelo las decisiones fundamentales son la resultante de un proceso de confrontación típico de "grupos sociales fragmentados y dinámicos", donde el conflicto no es un "síntoma de descomposición", sino una componente normal.

Para los realizadores del proyecto, el modelo político es el que globalmente caracteriza mejor a la universidad norteamericana contemporánea, dentro de una gran variedad de situaciones particulares que incluyen también elementos propios de los otros dos modelos señalados.

Y sería, agregamos nosotros, el que mejor se aviene, por lo menos en líneas generales, a la naturaleza y los fines de la mayoría de las universidades latinoamericanas.

Es importante recalcar esto último porque frecuentemente el carácter "político", que implica laboriosos procesos de discusión previos a la toma de decisiones, es el blanco preferido por quienes atacan a la universidad acusándola de servir como escenario de confrontación de intereses espurios, en lugar de atenerse a cumplir con eficiencia sus cometidos específicos.

Un examen aun superficial, de nuestra realidad universitaria, muestra que el modelo político es, también entre nosotros, el que mejor se corresponde con aquella. En la Universidad de la República, la toma de decisiones no rutinarias ha pasado siempre a

Agosto 1988/102

través del conflicto entre grupos de presión; la decisión final es el resultado de una negociación que culmina con el voto de una mayoría; no surge necesariamente de un consenso o de la imposición de la autoridad jerárquica.

Las definiciones políticas priman siempre sobre las demás, a pesar de evidentes elementos burocráticos que obran aún para el juicio de cuestiones académicas: reglamentaciones en materia de docencia, investigación, concursos, etc.; o de la vigencia de criterios consensuales en el trabajo de comisiones asesoras, tribunales, etcétera.

Es sumamente ilustrativo el caso de las designaciones docentes mediante el procedimiento de "llamado a aspirantes", que culmina en el seno de los consejos a partir del juicio técnico de comisiones asesoras. Es una curiosa forma de transacción entre la cooptación tradicional-elección entre pares-y el modelo político.

Vale la pena acotar que esta aplicación del cogobierno aun para las designaciones académicas, parece haber resuelto con éxito uno de los problemas más graves que plantea la administración corporativa de la universidad por el cuerpo docente: la aparición de intereses personales o de camarillas que rápidamente conducen a la institución a la mediocridad y el estancamiento. Para evitarlo, Karl Jaspers llegaba al absurdo de recomendar que la universidad fuera gobernada por funcionarios nombrados por el Estado, a cargo de quienes estaría, inclusive, la designación de los docentes.

El cogobierno quebra el monopolio corporativo e introduce elementos políticos que contribuyen a sanear la institución, al librar a una discusión pluralista y abierta todas las cuestiones universitarias.

La no comprensión de ese carácter básicamente político de la institución universitaria, ha confundido a autores tan lúcidos como Antonio M. Grompone, que si bien reputaba como natural la organización cogobernada y democrática de las universidades, reclamaba, en nombre de la neutralidad de lo científico, un consenso académico más allá del juego mecánico de las mayorías:

"En materia científica, resulta injustificado que las verdades deban triunfar por el número de votos. Si es preciso recurrir a eso, y si los votos, la autoridad de la fuerza, el poder político o de las mayorías es la última razón, se puede afirmar que ese centro de estudios está en crisis y que sus dirigentes, mayorías o minorías no tienen noción de sus cometidos (2).

Tal vez sea compatible la observación de Grompone en tanto se aplique a una práctica política menor, sesgada por mezquinos intereses.

En un plano de mayor enjundia, la definición de una política universitaria poco tiene que ver con problemas concretos de estricta índole científica o docente. Los grandes temas de la universidad son inseparables de la problemática general de su tiempo y de su entorno.

La propia concepción del papel y los fines de la universidad es una fuente inagotable de conflictos. No es lo mismo -ni son posturas compatibles- plantearnos la universidad desde el punto de vista de la educación y la cultura, que hacerlo desde un punto de vista simplemente económico, tecnológico o aun científico, como muy lúcidamente lo señalara Muniz de Rezende (3).

La opción entre una política de investigación al servicio de auténticos intereses nacionales u otra subsidiaria de las grandes metrópolis científicas, supone contradicciones ideológicas insalvables.

La creación de una nueva carrera, la modificación de un plan de estudios, movilizan opiniones e intereses legítimos y espurios. La polémica recientemente desatada a propósito del proyecto de carrera cruzada de **Ciencia y tecnología de los alimentos**, es una buena muestra de la naturaleza "política" del debate universitario.

Estos pocos ejemplos ilustran claramente que es irreal pretender que los conflictos se diluyan en aras de una comunidad sustancial de aspiraciones y no sea el "libre juego de las mayorías" el que define las opciones.

Hoy más que nunca, cuando la ciencia y la tecnología son cruciales factores de poder a nivel mundial, el juicio ético de su utilización se ha convertido en la clave política más importante de las decisiones universitarias.

Esto exige que sea una valoración política global a escala humana, y no simplemente universitaria, la que presida, en última instancia, las decisiones fundamentales de los claustros.

El espacio es tirano; muchas cosas más podrían agregarse respecto a esta legitimación de la idea de universidad política que hemos intentado desarrollar. Lo más importante, tal vez, tenga que ver con una fundamentación actualizada de la autonomía y el cogobierno democrático, apoyada más en esta concepción política de lo universitario, que en las viejas tradiciones corporativas.

Cuando sea posible, volveremos sobre el lema.

Tres reflexiones sobre la formación de docentes

Vicente Cremantí

1 En todo el mundo, la formación de docentes de la enseñanza media (no así de primaria) está a cargo de las universidades; en el Uruguay, los futuros docentes de secundaria provienen de dos orígenes: egresados del IPA, institución extrauniversitaria, o autodidactas (al menos en el aspecto pedagógico), ingresados por procedimientos más o menos regulares.

Que en todo el mundo el régimen sea distinto al nuestro no es, por sí solo, argumento bastante; también en todo el mundo la enseñanza primaria y media no es autónoma, y aquí tradicionalmente lo es, y está bien que lo sea, a juzgar por la experiencia de más de un siglo.

Sucede que hay tradiciones buenas y tradiciones malas, y debe determinarse si ésta de la ubicación de los institutos de formación docente es de las primeras o de las segundas.

Y para determinarlo, hay que estar a los resultados: el IPA nunca pudo preparar suficientes docentes, al menos en todas las ramas (si no, no habría "precarios" en Secundaria); y el descenso del nivel cultural de los estudiantes que llegan a la Universidad -al cual el de los profesores no puede ser ajeno- es tal que en la reunión de Solís del mes pasado los lamentos de todos los decanos que a él se refirieron fueron unánimes.

2 Los estudiantes del IPA tienen edad y nivel universitario, su formación es buena y su desempeño en el extranjero, cuando tantos debieron emigrar, lo prueba. Sin embargo: a) sus títulos no tienen reconocimiento internacional, por no ser universitarios, lo que a muchos les creó problemas laborales y de reválidas en el exilio; b) claman, prácticamente desde la fundación del instituto, por un sistema de cogobierno similar al universitario, lo que ha sido una fuente de conflictos con las autoridades de la ANEP; y c) rivalizan con los egresados de Humanidades, en una cuestión de campanario injustificable en un medio de las dimensiones del nuestro.

3 En la Universidad se forman estudiantes que, con la necesaria preparación pedagógica, podrán ser buenos docentes de la enseñanza media; todos los antecedentes de la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias, desde comienzos del siglo, antes y después de la separación de Secundaria en 1935, consideraron la posibilidad de la formación de docentes; el pronunciamiento contrario de la ley desgraciadamente aprobada en 1945, según la orientación de Vaz Ferreira y "bajo el signo del desinterés", como se dijo entonces, provocó -como no podía suceder de otro modo- la creación del IPA al margen de la Universidad (en ese asunto incidieron también otros factores: influencias masónicas e inquinas personales, pero eso ya es historia antigua).

El rector Maggiolo incluyó la creación de una Facultad de Educación en su plan, tan eficazmente saboteado por los propios docentes de la Universidad de entonces.

La ley de enseñanza del 72 encomendó a la ANEP la formación del personal docente "a nivel superior y nacional", en una invasión de competencias universitarias que fue denunciada por el propio Maggiolo en las comisiones parlamentarias.

Hoy, el proyecto de bases del Poder Ejecutivo para la nueva ley de educación sigue excluyendo a la Universidad de la formación de docentes de la enseñanza media; y la Universidad sigue en silencio.

(1) Estructuración de políticas y liderazgo efectivo en la educación superior, Naama, México, 1982.

(2) Universidad oficial y universidad viva, México, 1983.

(3) O saber e o poder na Universidade: dominação ou serviço? Paulo, 1982.